



Transición universitaria venezolana

Guillermo Tell Aveledo Coll *

Ante las posibilidades, aún inciertas y embrionarias, de un cambio de rumbo político para Venezuela, se plantea desde diversos sectores el emocionado reclamo hacia la recomposición de las relaciones entre la Sociedad y el Estado, y con ellas el impulso de una economía abierta y competitiva, liberada de prolongados controles que no sólo han destruido los fundamentos materiales de una sociedad próspera y productiva, sino aún más, distorsionado el valor del trabajo a todo nivel.

En ese sentido, todos los esfuerzos de reflexión y planificación de nuevas normas y arreglos sociales, en sí mismos revolucionarios, son importantes. De concretarse el cambio político, cabe plantearse que la magnitud de nuestro retroceso y corrupción requerirá la promoción activa de nuevos arreglos que permitan establecer los pilares de una sociedad autónoma y con la libertad de ordenarse espontáneamente, permitiendo las más amplias posibilidades de desarrollo de las capacidades humanas.

Uno de los actores cruciales de esta transformación habrán de serlo las Universidades. Desde las universidades tradicionales públicas y privadas, con contadas excepciones, se ha sostenido casi desde el primer momento del chavismo un importante espacio de resistencia a las pretensiones hegemónicas desde el poder. Esta resistencia no ha estado exenta de riesgos, y el chavismo ha mostrado especial saña contra la libertad académica y los espacios de investigación avanzada, que han puesto en peligro la continuidad de la vida universitaria venezolana. Si bien la realidad de la crisis económica ha puesto de relieve la creciente

depauperación de las comunidades universitarias, -evidente en la crisis de todas nuestras estadísticas educativas-, el uso de presiones políticas y coercitivas ha sido frecuente incluso en épocas de bonanza, como lo demuestra el asedio presupuestario y el cierre de las vías alternativas de financiamiento, la intervención en su sistema de otorgamiento de cupos estudiantiles, la intromisión judicial en elecciones internas y concursos de oposición, la invasión física de sus campus y destrucción de infraestructura, así como la detención arbitraria y uso de la violencia sobre profesores y estudiantes¹.

Se impone entonces el replanteamiento de las relaciones entre estas instituciones, la sociedad y el Estado. Sin una revalorización del trabajo intelectual, y de la educación de tercer y cuarto nivel, y sin la expansión de la investigación básica y aplicada, difícilmente alcanzaremos los propósitos de cambio a los que aspiran las grandes mayorías nacionales. Desde la perspectiva universitaria, el entusiasta comentario de muchos profesores e intelectuales se ha planteado en dos direcciones: la primera, la promoción activa de ideas y doctrinas que promuevan las libertades y que debatan contra nuestras diversas tradiciones autoritarias, y la segunda, en el diseño de y apoyo a planes sostenibles de apertura económica y desarrollo humano.

Aunque ambas discusiones son importantes, creemos que esto es ver el problema universitario nacional desde una perspectiva limitada. ¿Nos atreveremos los universitarios venezolanos a ceder nuestros propios poderes y a revisar nuestros propios espacios? El cambio que el país requiere necesitará eliminar todas las instancias de privilegio, intereses creados y posiciones de arbitraje derivadas de las asimetrías de poder, y para ello no basta simplemente un cambio de gobierno. La universidad venezolana en el país enfrenta dos

¹ Para datos detallados sobre esta situación, léase "El pensamiento bajo amenaza: Situación de la libertad académica y la autonomía universitaria en Venezuela", Coalición de Cátedras y Centros Universitarios de Derechos Humanos de Venezuela, Caracas, 2017, (<https://www.derechos.org/ve/web/wp-content/uploads/Informe-LA-y-AU-FIN.pdf>)

grandes obstáculos desde esta perspectiva: el control presupuestario estatal y su abigarrada organización interna.

El primer aspecto, el control de los presupuestos de las universidades públicas (junto con la presión regulatoria sobre las matrículas de los institutos privados) es la más ostensible traba a la autonomía universitaria. Justamente esa ha sido el arma por medio de la cual el Estado chavista ha impuesto una realidad menguada a la educación superior que resiste, y esa posibilidad de abuso político existirá aún si los presupuestos son expandidos ante las demandas actuales, bajo la potencial amenaza de control de sus líneas docentes, de extensión y de investigación. La revisión del actual estado de inviabilidad presupuestaria de nuestras universidades nacionales, requerirá entonces no sólo revisar las fuentes de su financiamiento, sino además la viabilidad social de muchos de sus programas y abordar la esencial injusticia del sistema educativo -distorsionado al punto que perder su propósito originalmente igualitario-. Deben replantearse fórmulas para el pago de matrícula diferenciado, con un amplio sistema de becas de pregrado y postgrado socioeconómicamente realista que no reproduzca las distorsiones derivadas del abandono en que Estado y sociedad han dejado la educación escolar y básica, esencial para la promoción de competencias y actitudes de productividad y disciplina.

No es sostenible ni deseable la gratuidad *tout court* en nuestro contexto de desigualdad, más aún sin la contraprestación de un rendimiento académico mínimo, que crea esa famosa especie de nuestro sistema: el estudiante profesional sin esfuerzos ni méritos. Esas rémoras son en efecto quienes han robado y dejado al abandono a los muchos jóvenes de menores recursos con una deficiente educación básica, que no pueden acceder con certeza a la educación de tercer nivel, destinándolos al acaso de una educación pretendidamente accesible, pero sin destino económico real, y condenándolos así la dependencia del poder de turno. Es preciso, también, considerar la diversificación del origen de los recursos que sostengan las extraordinarias inversiones en infraestructura, laboratorios, cátedras y centros de investigación y desarrollo científico, tecnológico y socio-humanístico necesarios en el mundo actual. Estas actividades no deben estar controladas por un sólo tipo de interés con

pretensiones ideológicas y económicas excluyentes, siendo lógico que colabore el Estado (que realizó indudables esfuerzos en dotación de terrenos e infraestructura a lo largo de todo el sistema, sobre cuya base podrá seguir avanzándose) con el relevante y creciente aporte de particulares estimulados en ese propósito.

Son también urgentes nuevas reglas que desestimen la corrupción, el cohecho y la prevaricación que históricamente ha afectado la gestión universitaria devenidos en espacios de captura de rentas, cuotas de poder político, acceso a cupos, canonjías vitalicias, favoritismos y opacidad administrativa. El gran adversario es la hipertrofia administrativa, y la complicada madeja de trámites innecesarios y sostenidos por la desconfianza, que insidiosamente crean pequeñas alcabalas y feudos donde hasta la más encumbrada autoridad queda impotente. Si bien estas manchas no son ni generalizadas ni comparables ante la ruina moral del Estado actual, requieren el trabajo de liderazgo más delicado, y es dónde se ofrecerán mayores resistencias.

Claro está, al final no será posible la transición de la universidad venezolana sin la promoción de una sociedad que valore todo esfuerzo, reconozca todo mérito y goce de una economía sana y expansiva. Sin este básico eslabón ninguna reforma tendrá efecto, y sólo lograremos desprestigiar el ánimo de cambio, permitiendo el resurgimiento de aquello que hoy condenamos.

** Decano de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana*

@GTAveledo

Artículo elaborado para la Red Universitaria de Derechos humanos

<https://redunivenezuela.com/>

Con el financiamiento de:



Iniciativa de:

